



Por qué los subsidios superan los bloqueos

20 de noviembre de 2020

Documento traducido del original en inglés escrito por **DANIEL GROS**¹ para la revista Project Syndicate

A medida que la segunda ola de la pandemia COVID-19 amenaza a Europa, los gobiernos deberían inducir a los propietarios de restaurantes, bares y tiendas a tomar unas vacaciones pagadas, en lugar de ordenarles que cierren. Una política de este tipo promete costos fiscales y sociales mucho más bajos y sería políticamente mucho más fácil de sostener en los difíciles meses de invierno que se avecinan.

BERLIN – Muchos gobiernos europeos están tratando de combatir la segunda oleada de la pandemia COVID-19 imponiendo una "luz de bloqueo", generalmente incluyendo limitaciones a las operaciones de restaurantes, bares y algunas tiendas no esenciales. La suposición detrás de estos cierres parciales es que el riesgo de infección es alto cuando las personas se mezclan en espacios cerrados. Un artículo reciente publicado en *Nature* proporciona más evidencia de que lugares como restaurantes, gimnasios y cafés pueden desempeñar un papel importante en la difusión del coronavirus.

Los cierres obligatorios han dado lugar a fuertes protestas populares (especialmente en Francia e Italia), porque amenazan los medios de vida de muchos pequeños propietarios de tiendas y restaurantes. Estos sectores ya estaban bajo presión del comercio electrónico antes de la pandemia, y muchos operadores marginales temen que no puedan sobrevivir ni siquiera a un ligero segundo cierre. Los gobiernos han estado tratando de ayudar compensarlos por la pérdida de ingresos. Pero en muchos casos la compensación ha sido tardía, parcial y difícil de atacar a los más vulnerables económicamente.

Sin embargo, es posible que los gobiernos no necesiten recurrir a cierres obligatorios si consideran la alternativa de impuestos o subsidios. Estas medidas fiscales hasta ahora no han desempeñado ningún papel en las llamadas intervenciones no farmacéuticas para luchar contra la pandemia, a pesar de que podrían alcanzar los mismos objetivos de distanciamiento social.

En términos concretos, el gobierno podría anunciar un subsidio a cualquier propietario de tienda o restaurante dispuesto a cerrar su establecimiento por un período determinado (digamos, 1-3 meses). Un cierre más largo sería mejor porque ayudaría a mantener bajas las infecciones POR COVID-19 durante el resto del invierno.

Una vez que una gran proporción de las tiendas han cerrado, los responsables de la formulación de políticas tendrían que evitar que el resto se abarrote más. Pero ya regulaban el hacinamiento antes de las nuevas restricciones de segunda ola pidiendo a los clientes que mantuvieran una



distancia mínima entre sí. Este tipo de regulación debe mantenerse en la forma más sencilla posible, exigiendo un número mínimo de metros cuadrados de espacio por cliente.

Por lo tanto, el gobierno podría comenzar especificando un subsidio en términos de una suma global por metro cuadrado, pagado por adelantado al propietario de cualquier establecimiento preparado para cerrar (para compras en la tienda o restaurantes) durante varios meses. Los servicios para llevar y las ventas en línea seguirían estando permitidos. A continuación, los operadores calcularían sus oportunidades a partir de otros canales de venta. Para los menos capaces de adaptarse, aceptar la subvención podría ser la mejor opción.

En principio, sería preferible llevar a cabo una subasta inversa en virtud de la cual los minoristas presenten el precio al que estarían dispuestos a cerrar. El gobierno podría entonces celebrar rondas sucesivas hasta lograr la reducción deseada en el espacio comercial. Pero puede que simplemente no haya suficiente tiempo para organizar esto ahora.

Existe una discrepancia similar entre los intereses sociales y privados con respecto al cambio climático. La mayoría de los economistas reconocen que un impuesto de Pigokovic sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, que lleva el nombre del economista británico Arthur Pigou, puede lograr la reducción deseada de las emisiones de manera más eficiente que la regulación directa de las actividades contaminantes. Los responsables de la formulación de políticas también deben aplicar esta lección al control de la pandemia.

En el caso del cambio climático, los responsables políticos están de acuerdo en general en que un impuesto sobre las emisiones es más apropiado que una subvención para no emitir. Pero con el control de la pandemia, la elección entre impuestos y subsidios no es tan clara.

En un artículo de 1960, el economista ganador del Premio Nobel Ronald Coase sostuvo que, siempre que se puedan descuidar los costos de transacción, la solución eficiente a un problema que implica una diferencia entre el costo social y el privado debería ser independiente de la asignación de derechos de propiedad. Para el control de la pandemia, los intereses de la sociedad están representados por el gobierno, lo que mantiene bajos los costos de transacción. La pregunta clave, entonces, es si el derecho a mantener una tienda o restaurante abierto está en manos del propietario o en su lugar pertenece a la sociedad. El hecho de que los gobiernos estén proporcionando compensación durante los encierros indica que reconocen que la decisión de permanecer abierto debe pertenecer al propietario. De ello se deduce que una subvención destinada a alentar el cierre de restaurantes y tiendas sería más apropiada que gravarlas.

Más prácticamente, una subvención de cierre ofrece una serie de ventajas. Proporcionaría compensación de ingresos a las empresas más marginales a un costo fiscal razonable, al tiempo que reduciría las interacciones sociales en tiendas y restaurantes. La subvención para cerrar la actividad en las tiendas debería ser especialmente atractiva para las tiendas y restaurantes en dificultades, cuyos propietarios están más inclinados a protestar contra los cierres obligatorios. Y obviaría la necesidad de que los responsables de la formulación de políticas hagan distinciones



arbitrarias entre bienes esenciales y no esenciales.

Otra ventaja a más largo plazo de este enfoque es que alentaría a los propietarios de pequeñas tiendas a modernizarse (o abandonar el mercado). De esta manera, los responsables políticos podrían ayudar a superar la fuerte resistencia al cambio estructural en este sector.

La lección es clara: A medida que la segunda ola de la pandemia amenaza a Europa, los gobiernos deberían cambiar de táctica induciendo a los propietarios de restaurantes, bares y tiendas a tomar unas vacaciones pagadas, en lugar de ordenarles que cierren. Una política de este tipo promete costos fiscales y sociales mucho más bajos y sería políticamente mucho más fácil de sostener en los difíciles meses de invierno que se avecinan.